

109
BIBLIOTECA CENTRAL
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO

PRESENCIA

La Paz, Bolivia,
lunes 26 de julio de 1993

2

Los medios de comunicación del Estado y el desarrollo

Por Luis Ramiro Beltrán

Son muy pocos y débiles los medios de comunicación del Estado en Bolivia. En el nivel de gobierno central cuenta éste con la Empresa Nacional de Televisión y con Radio Illimani, a más de un par de pequeñas emisoras militares. En el nivel descentralizado tiene las emisoras universitarias de televisión. Excepto por la gaceta oficial, instrumento de registro legal con mínima circulación, no hay medios gubernamentales impresos. La Editorial del Estado es hoy puramente nominal en tanto que algunas dependencias de la administración pública cuentan con pequeñas imprentas; las únicas mayores y modernas son la del Ministerio de Educación y la de la Fuerza Aérea.

El contraste entre este exiguo número de medios oficiales y el correspondiente a los medios privados y comerciales - algo más de 230 estaciones y nada menos que 62 canales de televisión - es abismal. Pero esta diferencia cuantitativa no es la única ni la peor. La diferencia en la calidad de producción también favorece marcadamente a los medios mercantiles sustentados por la publicidad. En cambio, frenados por la aguda estrechez de sus presupuestos, los medios del Estado muy rara vez pueden contratar personal de altas calificaciones y la estabilidad de éste es baja principalmente en función de influencias políticas derivadas de cambios de gobierno. En tales circunstancias lograr niveles aceptables de calidad en los programas es prácticamente imposible.

Solamente en cuanto al alcance de sus emisiones resultan las emisoras estatales equiparables, desde hace poco tiempo, a las privadas. En general la po-

tencia de emisión es muy baja en Bolivia: entre uno y tres kilowatts de salida. En radio, la Fides, con unos 16 kilowatts, es la de mayor potencia. Le sigue, junto a un par de privadas, la Illimani, con 10 kilowatts. Pero el alcance territorial no es sinónimo necesario de cobertura de público y así la emisora del Estado, debido a la baja calidad de su programación, no está entre las más escuchadas del país. En cuanto a la televisión, la del Estado goza hoy del máximo alcance territorial debido a que posee con exclusividad el beneficio de acceso a satélite. Por otra parte, contando recientemente con apoyo financiero y técnico del gobierno español, la teleemisora gubernamental ha mejorado sustantivamente su infraestructura física de transmisión. Sin embargo, no ha podido lograr una mejoría equivalente en cuanto a su capacidad de producción. Se da entonces la paradoja de un gran alcance con un nivel muy bajo de la programación. Los programas "enlatados" abundan hasta llegar a los niveles más altos de programación foránea en la región. Y lo poco que resta como producción nacional es principalmente programación noticiosa, deportiva y recreativa. Su público actual es, por tanto, muy escaso cuando pudiera ser el mayoritario.

Pese a esas limitaciones, los gobiernos se valen de la televisión oficial para su propaganda política al máximo de lo posible. No hacen, en cambio, que se cumplan las disposiciones legales que dieron a ese medio responsabilidades muy distintas a las de los medios comerciales. Ellas son fomentar la integración del país y contribuir a su seguridad, así como apuntalar la educación y estimular el desarrollo de las manifestaciones culturales, con énfasis en las correspondientes a los valores propios que caracterizan a la nación boliviana.

Lo anterior quiere decir que los medios de comunicación del Estado no están sirviendo a los fines del desarrollo nacional. Y esta lamentable deficiencia no debería prolongarse sin ser corregida. Ahora que se avecina la instalación de un nuevo gobierno la oportunidad luce propicia para componer la situación. Pero la composición no tiene por qué darse por la vía de la privatización de la radio y televisión estatales ni, mucho menos, mediante la liquidación de ellas. Al contrario, el Estado debe retenerlas, reorientarlas y robustecerlas al punto de que lleguen a cumplir a cabalidad las funciones de servicio público para las que nacieron. Tal es el caso, por ejemplo, del prestigioso Servicio Oficial de Radiodifusión del Uruguay.

Esé mejoramiento era siempre deseable. Pero ahora luce indispensable porque el nuevo gobierno democrático se ha comprometido con el pueblo a hacer desarrollo económico con justicia social. Y es que, en efecto, muchas de las tareas urgentes a cumplirse para ello en los terrenos de la educación y la cultura, de la salud y la vivienda y de la protección del medio ambiente, así como de la ciencia y tecnología, han de exigir de esos medios un apoyo eficaz.

El Estado boliviano necesita hoy más que nunca de autonomía y eficiencia en materia de comunicación y debe preservar la extraordinaria ventaja del acceso exclusivo al satélite para la televisión. Privatizar este medio sería, pues, algo injustificable en el caso boliviano. Aplicando sus previsiones programáticas, el nuevo gobierno debería más bien "capitalizarlo" para que atienda las necesidades - cada vez más premiosas - de la educación formal no masiva para el desarrollo que no son atendidas por las emisoras privadas. Y, al mismo tiempo,

debería eximir al Canal 7 de toda prioridad propagandística. En este sentido ya el actual gobierno acaba de tomar la saludable medida de ofrecer en licitación el noticioso, como hace en Colombia con ese y muchos otros programas el Instituto Nacional de Radio y Televisión, monopolio estatal democrático. Gracias a esa audaz iniciativa el canal estatal boliviano cuenta hoy con uno de los mejores noticiosos que, siendo independiente, no excluye información importante de interés gubernamental. El nuevo gobierno podría, entre otras disposiciones, consolidar y ampliar esta estrategia de operación conveniente y nada onerosa.

Usar los medios masivos de comunicación para favorecer al desarrollo no es una quimera. En las principales naciones del mundo democrático, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Holanda y Suiza y los países escandinavos, la radio y la televisión estatales sirven a las comunidades nacionales y no son simples armas políticas gubernamentales. Autónomas y regidas por consejos técnicos pluralistas, han forjado una tradición de excelente servicio público desinteresado en que la BBC de Londres alcanzó estatura eminente. Y en la propia América Latina países también democráticos como Colombia, Uruguay y Chile han demostrado que es posible valerse de la radio y la televisión estatales para servir al pueblo. Confíenmos en que, con el advenimiento de un nuevo gobierno democrático, ello resulte también factible en Bolivia.

Luis Ramiro Beltrán es comunicador.